

¿CONTRA QUIÉN ES LA GUERRA? CIEN DÍAS CRÍTICOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS



Foto: Jesus Abad Colorado

PRESENTACIÓN

EL BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA de Cinep y Justicia & Paz, la CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO, Codhes y la ESCUELA NACIONAL SINDICAL, ENS, presentan a la opinión pública un balance de la situación de los derechos humanos, durante los primeros cien días de la administración del presidente Uribe Vélez.

El balance se realiza con la información registrada por las tres bases de datos, especializadas en el seguimiento a las *violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario, desplazamiento forzado y violaciones a los derechos de los trabajadores sindicalizados*, respectivamente. Debemos anotar que los datos aquí consignados son parciales debido a que varios hechos sucedidos (especialmente en algunas regiones) no han podido ser registrados por falta de condiciones y garantías para la investigación y la denuncia, que de paso sea dicho, constituye una de las características del actual Estado de Conmoción; es decir, que la información respecto de las violaciones a dere-

chos humanos es filtrada y controlada por la fuerza pública, algunas autoridades de control y los medios masivos de comunicación.

Debemos señalar que a la fecha, sólo conocemos anuncios de postulados axiológicos por parte del gobierno nacional respecto de la política global de derechos humanos. No se tiene información sobre el Plan de Acción Nacional para la promoción y garantía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ni la política pública para la atención integral a la población desplazada, ni los mecanismos para la protección de los líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

En cien días de gobierno ha quedado claro que el unanimismo logrado en torno al liderazgo de Uribe Vélez, y especialmente frente a las tesis de recuperación del orden público y la seguridad democrática, es asumido por el gobierno como un cheque en blanco para el ambiente autoritario de su gestión y para la imposición más que para la concertación, de sus políticas y modelo de Estado. De igual forma, y por lo observado en estos primeros cien días, amplios sectores de la sociedad parecen estar dispuestos a legitimar y participar en la construcción de un Estado autoritario y políticamente excluyente. Cada vez se reduce, más y más, la llamada “masa crítica” en la sociedad.

El decreto 2002, expedido en el marco del Estado de Conmoción Interior, contradice convenios internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario y limita derechos fundamentales de los colombianos relacionados con el debido proceso, la presunción de inocencia, la distinción entre combatientes y no combatientes y la no-discriminación. Creemos, junto con otras organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, que las medidas que el gobierno adopte para establecer sus políticas y estrategias de seguridad y control del orden público, deben estar basadas en el pleno e irrestricto respeto a los tratados internacionales vinculantes para Colombia.

Las consideraciones y las medidas específicas del decreto 2002 incriminan a la población civil como la responsable del conflicto; se la señala como abierta colaboradora de los grupos al margen de la ley, y por



Foto: El Tiempo

tanto, es contra ella que se dirigen las medidas. Resulta clara la intencionalidad de estigmatizar y criminalizar a la población civil, de manera particular aquella que vive en zonas de presencia de los grupos insurgentes. El peso riguroso de la represión se está aplicando a los que no son y las medidas no apuntan específicamente a conjurar las causas que fueron señaladas como motivo de la perturbación.

Durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 7 de octubre de 2002, el Banco de Datos registró un total de 690 casos (145 por violaciones a los derechos humanos; 232 infracciones al derecho internacional humanitario; 262 hechos de violencia político social y 226 acciones bélicas). Este universo de casos arrojó un total de 1.908 víctimas (620 por violaciones a los derechos humanos; 602 por infracciones al derecho internacional humanitario; 601 por violencia política social y 501 en acciones bélicas).

No obstante importa precisar, que tanto el número total de casos, así como el de víctimas resulta superado por la sumatoria de cada una de las modalidades en que se desagregan, lo cual se explica en la circunstancia de que en cada hecho se pueden presentar registros de dos o más modalidades de violencia, al igual que sucede con las víctimas, pues una misma persona puede ser victimizada por violación a los derechos humanos y por infracción al derecho internacional huma-

LÍNEAS BÁSICAS DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO DE ALVARO URIBE VÉLEZ

nitario de manera simultanea.

El Presidente ha expuesto en declaraciones públicas y en carta dirigida a las ONG de derechos Humanos, el 16 de octubre, los que parecen ser lineamientos básicos de su política en materia de derechos humanos, bajo los presupuestos de que *“la mejor política, (de Estado) en materia de derechos humanos, es la política de seguridad”,* y que la población, además del deber de colaboración con la estrategia de seguridad, debe aceptar la restricción de algunos de sus derechos si quiere que *“el Estado recupere el orden, presupuesto ineludible para la vigencia real de las libertades”.*

- *“El día en que la seguridad democrática se enseñoree en todo el territorio de la Patria, no se cometerá un atentado más contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales”... Empero, garantizar un amplio espacio de discrepancia exige la nítida distinción entre el acto de disentir y la conducta criminal. Sólo cuando el Estado castiga implacablemente el crimen, hay plenas garantías para ejercer la oposición y la crítica”.*
- “Como Comandante civil de las Fuerzas Armadas he impartido una orden inquebrantable: toda acción de la fuerza legítima del Estado debe estar escrupulosamente ceñida a la Carta de derechos...de igual manera, he ordenado la más absoluta transparencia en los procedimientos de nuestros cuerpos armados...”
- Estamos trabajando para que todos los ciudadanos de bien cooperen

mediante información oportuna y confidencial con la fuerza pública...¿por qué descalificar a priori un instrumento que tiene pleno respaldo en el deber constitucional de colaborar con la acción transparente de la autoridad legítima? ¿Qué razones pueden esgrimirse para prejuzgarlo como esquema de concierto entre el Gobierno y las organizaciones criminales?

- “No existe en Colombia un conflicto social que justifique el uso de la violencia para obtener resultados políticos. Los canales democráticos han sido abiertos para la expresión libre de todas las reivindicaciones sociales”.
- “En la elaboración de las medidas, hemos tomado como referente los instrumentos constitucionales y legales de lucha contra el terrorismo que hoy rigen en las democracias europeas”.
- “En relación con la actividad de las organizaciones no gubernamentales y los defensores de derechos humanos, el Estado les garantiza plena libertad para desarrollar su loable objetivo social. No serán molestados, y se les protegerá cuando quiera que se les perturbe por parte de fuerzas oscuras”.

Respecto del tema del desplazamiento forzado, este es el planteamiento general del Gobierno:

- Una solución de fondo al desplazamiento forzado requiere de la obtención de condiciones de convivencia pacífica mediante el ejercicio legítimo de la autoridad, el cumplimiento de las funciones estatales de seguridad, defensa y justicia, que implican una solución definitiva al conflicto armado interno. Por ello, la mejor forma de prevenir el desplazamiento forzado es la restitución y consolidación de la autoridad democrática en todo el territorio nacional. Bajo este enfoque se propone avanzar en la generación de condiciones para prevenir y atender el problema, en cumplimiento de los preceptos del Derecho Internacional Humanitario, la observancia de los derechos humanos y los principios rectores de las Nacio-

nes Unidas para los desplazamientos internos.

- En particular se adelantarán acciones en cuatro componentes básicos: a) prevención y protección; b) atención de la emergencia; c) generación de condiciones para el restablecimiento; y d) fortalecimiento del sistema nacional de atención integral.
- *En cuanto al tema del restablecimiento, el Gobierno Nacional comenzará con la implementación de un programa piloto para el retorno de 30.000 familias campesinas, que hayan tenido que abandonar sus tierras. Dicho programa se soportará en: a) un esquema de subsidios de vivienda; b) la promoción de procesos de titulación de tierras; c) el apoyo a proyectos productivos y la generación de ingresos; y d) la promoción de esquemas de capacitación productiva.* (tomado de Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006).

La situación vivida durante estos primeros cien días y los datos registrados a continuación nos permiten advertir la brecha entre el discurso y los postulados axiológicos con el cumplimiento y coherencia, en la práctica, del gobierno. Pero sobre todo, nos lleva a ratificar nuestra preocupación, compartida por muchos, de que el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos están quedando supeditados a una estrategia de “seguridad democrática”, que hasta el momento no es otra cosa distinta que una estrategia de guerra y de represión contra la población civil.

DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO



Foto: Jesús Abad Colorado

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, de Cinep y Justicia y Paz registró, entre el 7 de agosto y el 7 de octubre/2002, un total de: 699 hechos de violaciones a los derechos humanos de los cuales 626 correspondieron a la categoría de persecución política, 31 por razones de abuso de autoridad y 42 a motivaciones de intolerancia social; 670 hechos de infracciones graves al derecho internacional humanitario; 607 casos de violencia político-social y 543 acciones bélicas.

Estos datos desagregados nos reflejan el siguiente panorama:

Respecto de violaciones a los derechos humanos, las modalidades en las que hubo mayores victimizaciones fueron: amenazas 256; detenciones arbitrarias 150; ejecuciones extrajudiciales 148, torturas 29, desapariciones 21 y violación sexual 5.

Los departamentos de mayor ocurrencia de estos hechos fueron en su orden: Arauca 215, Antioquia 70, La Guajira 62, Cauca 48 y Bogotá 42.

Respecto de los supuestos responsables de estas violaciones tenemos: las Autodefensas Unidas de Colombia AUC y otros grupos paramilitares aparecen comprometidos en 504, la Policía Nacional en 94, el Ejército Nacional en 64, la Armada Nacional en 24 y otras entidades y agentes estatales en 13.

Tabla 1: Total Victimizaciones en Derechos Humanos, 7 de agosto a 7 de octubre de 2002.

CATEGORÍA	AMENAZA	DESAPARICION	DETENCION ARBITRARIA	EJECUCION EXTRAJUDICIAL	HERIDO	TORTURA	VIOLENCIA SEXUAL	Total general
PERSECUCIÓN POLITICA	256	21	150	148	17	29	5	626
ABUSO DE AUTORIDAD	2	0	23	5	1	0	0	31
INTOLERANCIA SOCIAL	22	0	0	20	0	0	0	42
TOTAL	280	21	173	173	18	29	5	699

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política

Tabla 2: Total Victimizaciones según Presuntos Responsables, 7 de agosto a 7 de octubre de 2002.

ORGANIZACION	PP	AA	IS	TOTAL
ARMADA	3	21	0	24
AUC	364	0	34	398
CTI	1	0	0	1
DAS	6	0	0	6
EJERCITO	60	4	0	64
ESTADO COLOMBIANO	1	0	0	1
FUERZA PUBLICA	3	0		3
PARAMILITARES	98	0	8	106
POLICIA	90	4	0	94
INPEC	0	2	0	2
TOTAL	626	31	8	699

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política

Tabla 3: Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política según Distribución Geográfica, 7 de agosto a 7 de octubre de 2002.

DEPARTAMENTO	AMENAZA	DESAPARICION	DETENCION ARBITRARIA	EJECUCION EXTRAJUDICIAL	HERIDO	TORTURA	VIOLENCIA SEXUAL	Total general
ANTIOQUIA	0	0	15	47	8	0	0	70
ARAUCA	213	0	0	1	0	0	1	215
ATLANTICO	12	0	0	2	2	0	0	16
BOGOTA	0	0	40	0	2	0	0	42
BOLIVAR	3	0	5	7	2	0	0	17
CALDAS	0	0	2	13	0	2	0	17
CAUCA	2	6	27	13	0	0	0	48
CESAR	0	0	9	4	0	0	0	13
CUNDINAMARCA	0	0	3	0	0	0	0	3
HUILA	0	0	12	0	0	0	0	12
LA GUAJIRA	0	10	0	27	2	23	0	62
META	4	2	1	3	0	4	0	14
NARIÑO	3	0	0	7	0	0	0	10
NORTE DE SANTANDER	0	0	0	1	0	0	0	1
PUTUMAYO	0	0	0	2	0	0	0	2
RISARALDA	15	0	0	0	0	0	0	15
SANTANDER	1	0	0	4	1	0	0	6
SUCRE	0	0	3	1	0	0	4	8
TOLIMA	0	1	30	1	0	0	0	32
VALLE	3	2	3	15	0	0	0	23
Total general	256	21	150	148	17	29	5	626

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política

Tabla 4: Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política según Presuntos Responsables, 7 de agosto a 7 de octubre de 2002.

PRESUNTOS RESPONSABLES	AMENAZA	DESAPARICION	DETENCION ARBITRARIA	EJECUCION EXTRAJUDICIAL	HERIDO	TORTURA	VIOLENCIA SEXUAL	Total general
ARMADA	0	0	3	0	0	0	0	3
AUC	243	7	3	77	7	23	4	364
CTI	1	0	0	0	0	0	0	1
DAS	0	0	6	0	0	0	0	6
EJERCITO	4	0	42	9	2	2	1	60
ESTADO COLOMBIANO	1	0	0	0	0	0	0	1
FUERZA PUBLICA	0	1	1	1	0	0	0	3
PARAMILITARES	7	5	26	55	3	2	0	98
POLICIA	0	8	69	6	5	2	0	90
Total general	256	21	150	148	17	29	5	626

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política

En cuanto a violaciones al derecho internacional humanitario, el panorama fue el siguiente:

Se cometieron 670 hechos violatorios, distribuidos así: amenazas 287, homicidios intencionales de personas protegidas 216, heridos por el uso de métodos y medios ilícitos 47 y casos de torturas 29.

En cuanto a las responsabilidades de estas infrac-

ciones: las AUC y otros grupos paramilitares aparecen comprometidas en 426, las FARC-EP en 152, la guerrilla (sin identificación de una organización específica) 22, el ELN 8, el EPL 4, el Ejército Nacional 33, la Policía Nacional 22 y la Fuerza Pública en un caso.

Tabla 5: Infracciones Graves al DIH según Distribución Geográfica, 7 de agosto a 7 de octubre de 2002.

DEPARTAMENTO	AMENAZA	CIVIL HERIDO EN ACCIONES BELICAS	EN CIVIL MUERTO EN ACCIONES BELICAS	EN ESCUDO	HERIDO INTENCIONAL PERSONA PROTEGIDA	HERIDOS ATAQUE BIENES	EN HERIDOS A METODOS MEDIOS	POR HOMICIDIO Y INTENCIONAL PERSONA PROTEGIDA	MUERTOS METODOS MEDIOS	POR TORTURA Y	VIOLENCIA SEXUAL	Total general
ANTIOQUIA	11	4	7	1	11	0	6	57	0	0	0	97
ARAUCA	213	0	0	0	0	0	31	1	4	0	1	250
ATLANTICO	12	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	16
BOGOTA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
BOLIVAR	4	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	14
CALDAS	0	0	0	0	0	0	0	13	0	2	0	15
CAQUETA	3	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	12
CASANARE	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	5
CAUCA	3	0	0	0	0	0	2	13	0	0	0	18
CESAR	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
CUNDINAMARCA	0	0	2	0	1	0	0	6	0	0	0	9
CHOCO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
HUILA	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
LA GUAJIRA	0	0	0	0	2	0	0	27	0	23	0	52
META	5	6	0	0	0	0	0	3	0	4	0	18
NARIÑO	3	2	5	0	0	1	0	14	0	0	0	25
NORTE DE SANTANDER	0	6	2	0	0	0	4	19	2	0	0	33
PUTUMAYO	0	12	0	0	0	0	0	2	0	0	0	14
QUINDIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
RISARALDA	15	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18
SANTANDER	1	0	0	0	1	0	3	4	0	0	0	9
SUCRE	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	4	11
TOLIMA	10	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	13
VALLE	3	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	22
Total general	287	39	16	1	23	1	47	216	6	29	5	670

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política

Violencia Política, entendida como la ejercida por personas, organizaciones o grupos particulares no identificados pero en cuyos hechos hay una motivación política o los cometidos por actores armados no estatales pero cuyas acciones no se pueden tipificar como infracciones al derecho internacional humanitario, re-

gistró 607 victimizaciones. De ellas, 283 fueron asesinatos, 135 secuestros, 123 casos de heridos, 30 de torturas y 29 de desapariciones.

Las acciones bélicas durante este período sumaron un número de 543, pre-

Tabla 6: Infracciones Graves al DIH según Presuntos Responsables, 7 de agosto a 7 de octubre de 2002.

PRESUNTOS RESPONSABLES	AMENAZA	CIVIL HERIDO EN ACCIONES BÉLICAS	CIVIL MUERTO EN ACCIONES BÉLICAS	ESCUDO	HERIDO INTENCIONAL PERSONA PROTEGIDA	HERIDOS ATAQUE BIENES	EN HERIDOS A POR METODOS Y PERSONA PROTEGIDA	HOMICIDIO INTENCIONAL Y PERSONA PROTEGIDA	MUERTOS POR METODOS Y PERSONA PROTEGIDA	TORTURA	VIOLENCIA SEXUAL	Total general
AUC	243	0	0	0	7	0	0	77	0	23	4	354
CTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
EJERCITO	4	10	3	1	2	0	1	9	0	2	1	33
ELN	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8
EPL	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ESTADO COLOMBIANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FARC-EP	31	15	3	0	6	1	35	55	6	0	0	152
FUERZA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
GUERRILLA	0	2	4	0	0	0	11	5	0	0	0	22
PARAMILITARES	7	2	3	0	3	0	0	55	0	2	0	72
POLICIA	0	7	2	0	5	0	0	6	0	2	0	22
Total general	287	39	16	1	23	1	47	216	6	29	5	670

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política

dominando en ellas los combates con 456 acciones, seguidos de los ataques a objetivos militares con 30 y los bloqueos a vías con

26 acciones. Los departamentos en los que se registraron mayores acciones bélicas, en su orden, fueron: Antioquia, Caquetá, Cauca, Meta, Cundinamarca y Tolima.

Tabla 7: Acciones Bélicas según Modalidad y Distribución Geográfica, 7 de agosto a 7 de octubre de 2002.

DEPARTAMENTO	ATAQUE OBJETIVOS MILITARES	A BLOQUEO DE VÍAS	COMBATE	EMBOSCADA	INCURSION	MINAS	SABOTAJE	Total general
ANTIOQUIA	2	4	84	0	0	3	0	93
ARAUCA	0	0	4	0	0	0	0	4
BOLIVAR	0	0	5	0	0	4	0	9
BOYACA	0	0	19	0	0	0	0	19
CALDAS	0	0	6	0	0	0	0	6
CAQUETA	5	2	62	7	0	0	0	76
CASANARE	5	0	11	4	0	0	0	20
CAUCA	3	4	37	0	3	0	0	47
CESAR	0	1	9	0	0	0	0	10
CUNDINAMARCA	0	13	25	0	0	0	0	38
CHOCO	0	0	14	0	0	0	0	14
GUAVIARE	0	0	3	0	0	0	0	3
HUILA	1	0	4	4	0	0	1	10
LA GUAJIRA	0	0	9	0	0	0	0	9
MAGDALENA	0	0	6	0	0	0	0	6
META	0	0	46	0	0	0	0	46
NARIÑO	4	1	3	4	1	0	0	13
NORTE DE SANTANDER	0	0	28	0	0	0	0	28
PUTUMAYO	8	0	8	0	0	0	0	16
QUINDIO	0	0	3	0	0	0	0	3
RISARALDA	0	0	11	0	0	0	0	11
SANTANDER	0	0	15	0	0	0	0	15
SUCRE	0	0	4	0	0	0	0	4
TOLIMA	2	1	32	0	0	0	0	35
VALLE	0	0	8	0	0	0	0	8
Total general	30	26	456	19	4	7	1	543

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política

Las cifras registradas por el Banco de Datos, respecto de violaciones a los derechos humanos, violencia política e infracciones al derecho internacional humanitario nos permiten plantear las siguientes conclusiones:

Las violaciones a los derechos humanos en sus distintas modalidades, que podríamos llamar tradicionales y sistemáticas, se mantuvieron en su nivel, respecto de periodos anteriores.

Las amenazas y los asesinatos selectivos predominan en el panorama y se registra un aumento preocu-

Tabla 8: Total Acciones Bélicas, 7 de agosto a 7 de octubre de 2002.

CATEGORIA	Total
ATAQUE A OBJETIVOS MILITARES	30
BLOQUEO DE VIAS	26
COMBATE	456
EMBOSCADA	19
INCURSION	4
MINAS	7
SABOTAJE	1
Total general	543

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos Violencia Política

pante de los casos de torturas. Las detenciones arbitrarias se dispararon escandalosamente en el período. Los cuadros anteriores registraron las detenciones arbitrarias, a las cuales el Banco tuvo acceso con todos los datos de las víctimas. En el capítulo siguiente señalamos las cifras gruesas de detenciones realizadas en aplicación del decreto 2002, de conmoción interior y en las zonas de rehabilitación y consolidación, de las cuales el Banco solo tiene información detallada de muy pocos casos, debido al control que de la información hace la Fuerza Pública.

Se tuvo conocimiento de casos masivos de violaciones a los derechos humanos de gran preocupación:

El 20 de septiembre, en Santander de Quilichao (Cauca), una Comisión Humanitaria conformada por varias organizaciones sociales, de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, fue detenida y atropellada en sus derechos (intimidación, movilización, libertad, buen honra), por miembros del Ejército y de la Policía Nacional cuando se movilizaba con el fin de comprobar denuncias hechas por campesinos e indígenas

que participan en la movilización social y agraria iniciada el 16 de septiembre.

El 23 de septiembre tropas del batallón antiaéreo Nueva Granada entraron en una vivienda campesina de la vereda Brisas de Yanacué, en Cantagallo, y ejecutaron a un adulto y un niño de nueve años, hirieron a dos personas más, a una de ellas se le tuvo que amputar una pierna y un brazo y detuvieron a cuatro personas más. Las autoridades militares presentaron el hecho como personas muertas en combate con guerrilleros del Frente 24 de las FARC-EP y que la operación se había realizado por los reportes de un informante. Tanto los heridos como testigos afirmaron que en el caserío no hubo ningún combate y que la tropa en horas de la madrugada en la vivienda de la familia humilde y los masacró mientras dormían.

El 31 de agosto 19, indígenas Arzarios fueron mutilados y ejecutados por paramilitares de las AUC, en el caserío El Limón del corregimiento de Tomarrazón. Los paramilitares asesinaros a los indígenas delante de los demás miembros de su comunidad y les dieron plazo de una hora para que el resto abandonara el territorio. Los paramilitares quemaron los ranchos, mataron varios animales y saquearon los enseres de las familias de los caseríos y veredas de El Limón, la Palma y Tomarrazón, en la Sierra Nevada.



Foto: Jesús Abad Colorado

ESTADO DE CONMOCIÓN Y ORGANISMOS DE CONTROL

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Uribe Vélez, en desarrollo de su denominada política de seguridad democrática, lo que plantean es una reedición de la vieja doctrina de seguridad nacional, en tanto parte de la base de la existencia de un *enemigo interno colectivo*; adopta medidas para la implementación de una estrategia de *guerra total*, vulnerando los principios esenciales de distinción y no involucramiento de la población dentro del conflicto. Adicionalmente, como parte de su concepción, genera mecanismos para el *sometimiento del poder civil al militar*.

Dicha concepción autoritaria para el manejo del orden público ha sido explícita a través de las medidas adoptadas en el contexto de la conmoción interior; tal es el caso de los considerandos del decreto 2002 de 2002, donde se manifiesta que: *“dentro de los principales soportes de la acción delincuencial de tales organizaciones se encuentra por una parte, la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil”*. En tal sentido, las medidas que se han puesto en marcha permiten señalar que el blanco de las acciones resultan ser quienes residen en zonas de conflicto o bien las organizaciones que desarrollan acciones reivindicativas, de oposición política, la defensa de los derechos humanos, e inclusive quienes tienen como eje central de su actividad, la búsqueda de la paz.

La persecución del “enemigo interno colectivo”

Diversos son los mecanismos, técnicas y estrategias implementadas en

este periodo, donde el blanco del accionar ha sido, como inicialmente se preveía, la población civil y sectores sociales organizados.

Uno de ellos, la política de “pescas milagrosas”, denominada jurídicamente como capturas preventivas. Tomando como referencia los casos y reportes oficiales a que ha tenido acceso el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política -difundidos en sus boletines de seguimiento al estado de conmoción- desde el 10 de septiembre han sido privadas, arbitrariamente, de la libertad 846 personas. Es decir, que diariamente 13 personas fueron objeto de detención arbitraria. Particularmente grave es lo ocurrido en el municipio de Saravena (Arauca), donde miles de personas fueron concentradas en el coliseo del municipio y allí reseñadas y marcadas con un sello de tinta indeleble, imágenes que hacen recordar las acciones desarrolladas en los estados durante la Dictadura Chilena.

A fin de dar apariencias de legalidad, por parte de la Fuerza Pública se ha recurrido a la implementación de mecanismos encubiertos, desprovistos de cualquier tipo de control, como los llamados “registros voluntarios”, que en el solo departamento de Arauca ascienden a 335, actuación que va en abierta contravía de lo dispuesto en la Constitución Nacional, e inclusive en las propias normas de excepción.

El diario El Tiempo publicó el pasado 5 de noviembre que “las autoridades realizaron 283 allanamientos, en los primeros 8 días, después de iniciadas las operaciones el 22 de octubre, minutos después del estallido del carro bomba a menos de 15 metros de la sede de la Policía Metropolitana”. Igualmente, señaló que “algunas de estas operaciones, sin embargo, han desatado polémicas, especialmente la realizada el pasado 25 de octubre a la sede de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz”.

Días anteriores al allanamiento a la sede de la Asamblea, la ministra de defensa, Martha Lucía Ramírez, había dicho en relación con el papel de las ONG: *“Hay ONG que han sido muy valiosas para el desarrollo de*

Colombia. Lo que pasa es que a veces hay gente que se parapeta en estas organizaciones para desarrollar actividades que están fuera de la ley y que atentan contra la seguridad pública". (El Tiempo 1/22 septiembre 19 de 2002).

Guerra total

La conversión de zonas urbanas, como la Comuna 13 de Medellín, en teatros o laboratorios de guerra, ha planteado la institucionalización de los mecanismos de facto, así como el abierto desconocimiento institucional a la normatividad del derecho internacional humanitario, donde los principios esenciales de distinción y proporcionalidad en el uso de la fuerza, han sido echados por la borda.

Pese a que desde su discurso de posesión el Presidente Uribe planteó una descalificación del paramilitarismo, así como la voluntad de su Gobierno en perseguirlos, las expresiones directas o las dadas a través de sus representantes en las zonas de rehabilitación y consolidación, plantean un abierto silencio y ausencia de acción en relación con la persecución a dichas organizaciones, o bien como en el caso de Tame (Arauca), municipio bajo abierto y público control paramilitar, exclusión de ser objeto de cualquier medida excepcional, lo que permite observar una tendencia a permitir la consolidación del paramilitarismo.

Como parte de dicha decisión de Estado de avanzar en una guerra total, es notorio el papel de la Fiscalía General de la Nación, en primer lugar como fue denunciado abiertamente por el Representante a la Cámara, Gustavo Petro, por medio de la *"infiltración paramilitar en gran escala, planificada, organizada con un exclusivo propósito: frenar procesos que afecten a los 'paras' y a sus aliados dentro del Estado"*, señalándose además que: *"un informante que estuvo en una reunión de la cúpula de las Auc, en donde Vicente Castaño, 'El Profe', presenta una lista de 10 fiscales e investigadores del CTI que tienen casos de paramilitarismo ... 'El Profe' ordena asesinarlos y su hermano, Carlos, dice que no es conveniente y que lo mejor es hacerlos trasladar, bajarles el perfil, quitarles las investigaciones ... Todos fueron o despedidos por el Fiscal o les quitaron los casos de inves-*

tigación con los 'paras' o se les presionó a renunciar y algunos están en el exilio". (El Tiempo, noviembre 14 de 2002).

Sometimiento de la autoridad civil y órganos de control y de justicia a la autoridad militar

Resulta claro que las medidas adoptadas buscan supeditar la autoridad civil a la militar. El decreto 2002 así lo expresa, respecto de las zonas de rehabilitación y consolidación. De la misma forma respecto de los órganos judiciales y de control del Estado, son vinculados a la estrategia de guerra, integrando y acompañando operaciones militares. Investigadores y agentes de control a órdenes de un comandante militar, en unos casos, porque en otros, los propios militares hacen las veces de investigadores y funcionarios del Ministerio Público. Como lo ha señalado el Defensor del Pueblo "el guerrero y el juez, fundidos en un solo cuerpo es el camino más breve que puede conducir a la disolución del Estado de derecho".

En un período relativamente corto de vigencia de los decretos y de las zonas de rehabilitación y consolidación, existe una amplia gama de derechos vulnerados; la mayoría de ellos se han producido en el contexto de las movilizaciones y protestas legítimas de la población, que de antemano los medios de comunicación y algunas autoridades criminalizaron al asociarlas con grupos insurgentes; en una gran mayoría de los casos de detenciones se desconoce la situación actual en la que se encuentran quienes fueron victimizados debido a las dificultades de acceso directo a la información y a las investigaciones.

Durante el desarrollo de las operaciones militares por parte de la Fuerza

Pública y el Departamento Administrativo de Seguridad en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, expresaba el Comandante del Ejército, General Carlos Alberto Ospina Ovalle: *“Queremos que el ministerio público acompañe a nuestras unidades y certifique los procedimientos que estamos haciendo”*.

En relación con el control sobre las acciones desarrolladas por parte de la Fuerza Pública en dicha zona de rehabilitación y consolidación de Sucre y Bolívar, el Procurador Regional de Sucre señaló que: *“Hasta la fecha no han acompañado a la Fuerza Pública en ninguna operación por circunstancias que escapan a la voluntad de los (sic) nuestros funcionarios ya que la fuerza pública no ha informado de dichas diligencias”*.

El más reciente informe de Human Rights Watch, hace un preocupante balance del papel de la Fiscalía General de la Nación: *“... bajo la dirección del Fiscal Luis Camilo Osorio, la capacidad de la institución para investigar y procesar los abusos de los derechos humanos se ha deteriorado significativamente. Este deterioro es producto de varios factores bajo control del Fiscal General: una falta de apoyo a los fiscales encargados de casos difíciles de derechos humanos; una falta de adopción de medidas adecuadas y oportunas para proteger a los funcionarios cuyas vidas han sido amenazadas; y el despido y la renuncia forzada de experimentados fiscales e investigadores judiciales ... La actitud del Fiscal General en estos casos podría contribuir a alimentar la percepción, que aún subsiste entre los paramilitares y algunos miembros de las Fuerzas Armadas, de que los abusos a los derechos humanos son una forma aceptable de librar la guerra”*. De ello son

indicativos los casos del General [®] Rito Alejo del Río, el General Rodrigo Quiñonez y el ex embajador Carlos Arturo Marulanda.

En la mencionada carta a las ONG de derechos humanos, el Presidente Uribe señaló: *“Los eventuales riesgos... del sistema de colaboración civil con la Fuerza Pública, deben ser minimizados y conjurados mediante dispositivos de control y transparencia. El Gobierno está abierto a escuchar propuestas y a tramitar todas las quejas y denuncias fundadas”*.

Que tan importante sería, que en cumplimiento de lo anterior, alguna autoridad explicara a la opinión pública los hechos sucedidos en el marco de la “Operación Escorpión” en el departamento de Sucre. En la segunda quincena de agosto y primeros días de septiembre, en desarrollo de la mencionada operación, tropas de los batallones de contraguerrilla de la Infantería de Marina, llegaron a la zona, allanaron viviendas, acompañados de una mujer encapuchada quien señalaba una a una a las personas que debían ser detenidas. De esta acción fueron capturadas 60 personas en Don Gabriel, Salitral, Chengue, Pijiguay y Desbaranco (Sucre), sindicadas de pertenecer al frente 35 de las FARC-EP; luego fueron trasladadas al batallón de Corozal, donde permanecieron cinco días, incomunicados, amarrados en las noches a la intemperie. El 4 de septiembre, cuando llegaron los Fiscales, señalaron que estas personas estaban siendo acusadas por un hombre-informante de pertenecer a grupos insurgentes; posteriormente fueron trasladados a la cárcel judicial La Vega, en Sincelejo donde permanecieron más de 45 días, al cabo de los cuales fueron dejados en libertad, paulatinamente haciéndoles firmar un documento en el que constaba haber recibido “buen trato”.

O que la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil recibiera alguna respuesta del Gobierno, pues según su secretario Ejecutivo: “Lo único que hemos recibido es una carta de la Fiscalía General de la Nación y allí dice que la diligencia fue dispuesta por Gloria Criales Vanegas, fiscal especializada delegada ante la SIJIN MEBOG, mediante resolución judicial -sin número- de fecha 24 de octubre. Sin embargo, el teniente que firma el acta de allanamiento menciona que no hay orden judicial”.

EL DESPLAZAMIENTO NO SE DETIENE

El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez no ha terminado de definir una política para el desplazamiento forzado y ya se calcula que hay en Colombia otras **149.387 personas** (entre el 1 de julio y 30 de septiembre) huyendo para sobrevivir a la degradación del conflicto armado y otras formas de violencia socio política que persisten en el territorio nacional, de acuerdo con la información procesada por Codhes.

En el trimestre comprendido entre julio 1 y septiembre 30 de 2002 el desplazamiento forzado interno, ocasionado por factores de violencia, presenta un incremento significativo respecto de las estimaciones de los últimos 17 años. En efecto, en estos tres meses el número de personas obligadas a desplazarse alcanzó la cifra de 149.387, frente a las 90.179 y 113.554 de los dos primeros trimestres. Es decir, un promedio de 1623 personas cada día, 67 personas cada hora, una familia cada 10 minutos.

La magnitud del desplazamiento en este período refuerza la hipótesis según la cual esta estrategia de guerra se asocia con mecanismos de repoblamiento, que responden a intereses políticos y económicos de quienes promueven la guerra interna para controlar territorios y recursos con fines que trascienden la lógica militar.

El hecho de que un promedio diario de 1.623 personas tenga que huir de la violencia impuesta por los actores armados, es tal vez la peor manifestación de la degradación de un conflicto que se ensañó contra la población civil sometida, cada vez más, a una condición de indefensión y a un estado de desprotección por la violación masiva y sistemática de sus derechos fundamentales.

En este período continuó la diáspora del campo a la ciudad que suma a los migrantes producto del empobrecimiento rural, las personas desarraigadas por la violencia. Creció el desplazamiento entre ciudades y al interior de las mismas, en una dinámica ascendente de urbanización de las consecuencias del conflicto armado, especialmente en ciudades como Medellín, Cali, Barrancabermeja, Bogotá, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga. De igual manera, aumentó el despla-

miento como consecuencia de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito que también han afectado cultivos básicos para la subsistencia humana. A su vez, continúa una acción sistemática de ataques a pueblos indígenas y afrocolombianos en zonas de Cauca, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá y sectores de Antioquia, Tolima, Nariño, Putumayo, Córdoba y Chocó por parte de grupos paramilitares y guerrilleros.

Centenares de funcionarios públicos fueron forzados a renunciar o a cambiar de lugar de residencia y trabajo como consecuencia de presiones armadas, los maestros, la misión médica, los estudiantes universitarios, los líderes sindicales, sacerdotes y monjas de la iglesia católica y pastores evangélicos, también ingresaron al flujo constante de población civil desplazada de los territorios de la guerra hacia los centros urbanos.

Los departamentos de Antioquia, Bolívar, Meta, Caquetá, Putumayo, Huila, Tolima y Cundinamarca, registraron los mayores centros de llegada de población desplazada en este trimestre, en procesos migratorios unifamiliares e individuales que se asentaron en ciudades capitales e intermedias cuyo crecimiento sigue siendo caótico.

Entre julio y septiembre se registraron algunos desplazamientos masivos (más de 50 personas en un sólo evento de desplazamiento) aunque en menor proporción que en periodos anteriores. Esto se explicaría en parte por la aplicación de una estrategia que se centra en homicidios selectivos de personas protegidas por el derecho internacional

humanitario a cambio de las masacres, con la intención de invisibilizar el desplazamiento y las violaciones a los derechos humanos.

El desplazamiento forzado en las zonas de frontera de Colombia, se enfrenta con una coyuntura cada vez más compleja para quienes buscan protección en los países vecinos. En primer lugar, es necesario mencionar la regionalización del conflicto y la política de seguridad hemisférica de Estados Unidos, lo que ha producido el fortalecimiento de la militarización y el incremento del pie de fuerza en las fronteras.

Por ejemplo, en Brasil durante el mes de septiembre se movilizaron aproximadamente 28 mil hombres hacia el norte —territorio vecino a Colombia, quienes se encuentran en estado de “alerta permanente”. En el mes de agosto, el gobierno venezolano anunció el aumento de 7 mil soldados más hacia la frontera, que se sumaron a los 20 mil apostados en las bases militares de los estados limítrofes con Colombia. El gobierno de Perú ha reforzado su presencia a través de la militarización de la frontera —funcionan 17 puestos de vigilancia entre Puerto Asís, Putumayo y el Estrecho, Perú; 2 destacamentos militares y 9 comisarías de la Policía Nacional. En Ecuador, de acuerdo con información suministrada por el Centro de documentación “Segundo Montes Mozo S.J”., permanece un contingente militar de aproximadamente 15 mil hombres, tres veces más que el número de efectivos presentes en la última guerra entre Perú y Ecuador.

En segundo lugar, las prácticas de protección de los gobiernos vecinos son cada vez más restrictivas. Por ejemplo, en Ecuador, según cifras del Ministerio

de Relaciones Exteriores de este país, durante el trimestre se presentaron 1563 solicitudes de refugio, de las cuales sólo 286 fueron aceptadas, aproximadamente el 18.3%, comparado con una proporción de reconocimiento del 30% a comienzos del año. La mayoría de los solicitantes de refugio y asilo se presentaron durante los meses de septiembre y octubre del presente año. Paralelo a esta dinámica, el gobierno ecuatoriano manifestó su disposición de revisar su política migratoria respecto de Colombia. Preocupan las declaraciones de los solicitantes de refugio relacionadas con las fumigaciones como uno de los motivos de desplazamiento. En el Putumayo de acuerdo con los datos suministrados por SISDES, durante el trimestre julio-septiembre, fueron desplazadas 2836 personas.

En el caso de Panamá, prosigue la indefinición del estatus jurídico de los colombianos(as) en la región de Darién. En Venezuela, aún no se ha puesto en marcha

Tabla 9: Veinte principales municipios receptores de población desplazada

MUNICIPIOS	No. Personas
BOGOTÁ D.C.	17500
MEDELLÍN	10677
SANTA MARTA	8000
CÚCUTA	6989
IBAGUÉ	6000
AGUSTIN CODAZI	4950
MONTERIA	4563
POPAYÁN	4930
VALLEDUPAR	4456
FLORENCIA	4095
NEIVA	2985
PASTO	2982
BARRANQUILLA	2565
MAPIRIPAN	2500
SINCELEJO	2450
BUCARAMANGA	1987
VALENCIA	2000
VILLAVICENCIO	1926
CARTAGENA	1788
SAN DIEGO	1796
SUBTOTAL	95139

Fuente: Consultoría para los derechos humanos y Desplazamiento, Codhes Sistema de información sobre desplazamiento y Derechos Humanos.

Tabla 10 Departamentos receptores de la población desplazada en el período analizado

Departamento	No. Personas
CESAR	20294
SANTA FE DE BOGOTA D.C.	17500
ANTIOQUIA	15561
CORDOBA	10063
CAUCA	8472
MAGDALENA	8266
NORTE DE SANTANDER	7921
TOLIMA	6418
META	5039
NARIÑO	5025
CAQUETA	4779
ATLÁNTICO	4702
HUILA	4326
SANTANDER	3836
BOLIVAR	3604
CUNDINAMARCA	3323
SUCRE	3278
PUTUMAYO	2836
LA GUAJIRA	2475
VALLE DEL CAUCA	2097
QUINDÍO	1704
CHOCO	1617
CALDAS	1541
RISARALDA	1125
BOYACA	1101
ARAUCA	940
CASANARE	776
GUAVIARE	587
VICHADA	141
AMAZONAS	25
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y P	15
TOTAL ESTIMATIVO NACIONAL	149387

Fuente: Consultoría para los derechos humanos y Desplazamiento, Codhes Sistema de información sobre desplazamiento y Derechos Humanos.

la Comisión de Elegibilidad encargada de aplicar la Ley de Asilados(as) y Refugiados(as) promulgada en el año 2001.

Una mirada a los factores, tendencias y características que han generado este incremento del desplazamiento forzado permite destacar los siguientes aspectos:

- El fracaso de los procesos de paz entre el gobierno del presidente Pastrana y las organizaciones insurgentes y el respaldo electoral a los principales críticos de esta política, ha llevado el país a un periodo

indefinido de escalamiento, radicalización y redefinición del conflicto armado. En este contexto, se desarrolla la política gubernamental de “mano dura”, la confianza en la “solución militar” en el menor tiempo posible, el desarrollo de políticas como las redes de informantes de la Fuerza Pública que rompen principios fundamentales del DIH, y la tendencia al recorte de las garantías y las instituciones democráticas. Por su parte las estrategias insurgentes apuntan a la desestructuración de las condiciones de gobernabilidad local a través de las amenazas y atentados contra autoridades locales; el ataque a la infraestructura económica y social; la intensificación de acciones urbanas y muchas acciones destinadas a demostrar su capacidad de desestabilización y a poner en tela de juicio la eficacia de las estrategias del nuevo gobierno. Los grupos paramilitares, por su parte, disputan territorios y poblaciones a las guerrillas, e intentan afianzar una propuesta de control político y social a través de confinamientos, amenazas, incursiones e incluso estrategias de “política social” y repoblamiento.

- En este escenario arrecian las agresiones contra la población civil y se hace cada vez más inviable el ejercicio de los derechos ciudadanos en las diferentes regiones del país. Los ataques a la misión médica, a docentes, sindicalistas, activistas sociales y defensores de los Derechos Humanos, la ampliación e intensificación de las fumigaciones, y la ya recurrente expulsión de campesinos, indígenas, afro-colombianos y colonos de territorios estratégicos, apa-

recen cada vez más como afinadas estrategias de los actores de la guerra, así como de los agentes interesados en la acumulación vertiginosa de capital por vías violentas.

- Las principales tendencias del desplazamiento reflejan los efectos de las estrategias de control y recuperación territorial y el repliegue o contraataque por parte de los distintos actores armados, y especialmente en sectores urbanos. Una característica de dicha tendencia es la visibilización del desplazamiento intra-urbano. Los hechos de la Comuna 13 en Medellín, o en el distrito de Aguablanca y Siloé en Cali, se suman a los procesos menos publicitados de expulsión en el marco del conflicto urbano, resultado de las estrategias de disputa y copamiento militar desplegadas en Barrancabermeja, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga o Buenaventura, para solo citar algunos casos.
- Así mismo, se presentan intensos desplazamientos y reacomodamientos poblacionales en zonas rurales. Los desplazamientos interveredales, intermunicipales e interregionales muchas veces no registrados, surgen como mecanismos de autoprotección frente al incremento de las disputas entre los actores armados y al embate de proyectos basados en la expulsión de moradores ancestrales. Las restricciones, bloqueos y castigo a quienes se desplacen, completan el marco de crisis humanitaria en el que se debaten cada vez más sectores sociales. En particular, CODHES quiere llamar la atención del país, de los medios masivos de comunicación y de la comunidad

internacional sobre la situación humanitaria en las zonas que fueron destinadas o señaladas como espacios para el desarrollo de los procesos de paz. El país parece haber olvidado estas zonas en las cuales concentró su atención crítica durante los últimos años.

¿Habrá Política Pública?

Entre tanto, genera profunda preocupación el alto grado de indeterminación, ambigüedad y contradicciones de la propuesta gubernamental respecto del desplazamiento forzado. A la fecha, salvo algunas referencias esporádicas en medios masivos de comunicación o la presentación de propuestas esquemáticas en foros cerrados; ni el país ni la comunidad internacional conocen un plan específico que desarrolle una política pública concreta fundamentada en la prevención de las causas estructurales del desplazamiento forzado, cuyo criterio fundamental sea el cumplimiento del deber estatal de protección y la atención integral a las personas en riesgo o en situación de desplazamiento, ni mucho menos una política basada en la plena vigencia y realización de derechos. Nuevamente se hace caso omiso de las recomendaciones de organismos internacionales, los avances logrados en gobiernos anteriores y las propuestas de la sociedad civil y las personas y sectores afectados.

Por el momento no se conocen las estrategias del gobierno en la materia, pero sin lugar a dudas hay que llamar la atención sobre las consecuencias de la política de orden público para la viabilidad de los programas específicos sobre desplazamiento.

El esquema de retornos como eje fundamental de la política, en medio de uno de los momentos de mayor agudización y degradación de la guerra, ofrece serios cuestionamientos respecto de su viabilidad y pertinencia. Cuáles son las condiciones de voluntariedad que implica que se escoge el retorno como la mejor opción entre otras, y no como la única elección frente al hambre, el hacinamiento o las inhumanas condiciones en los lugares de asentamiento—. ¿Cuáles las condiciones de seguridad y protección, que incluyen inversión social? ¿Cuáles las posibilidades de

sostenibilidad que garanticen soluciones duraderas y el derecho a no repetición del desplazamiento forzado?. ¿Dónde quedan las políticas de prevención, atención humanitaria, restablecimiento, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en la propuesta gubernamental? ¿Cuáles son los criterios de selección de los beneficiarios de los procesos de retorno? ¿Cómo se van a garantizar los derechos de los poseedores y propietarios de buena fe que ocupan los predios y territorios objeto de los retornos? ¿Qué garantías de protección se van a establecer en zonas de disputa en el marco del conflicto armado o bajo dominio de actores armados irregulares? ¿Son retornos —regreso a los lugares de expulsión— o son reubicaciones, lo cual implicaría una propuesta muy distinta a la actual?

La propuesta de eliminación de las personerías en los municipios de más de 100.000 habitantes —entre otras del mismo tenor regresivo—, abre profundos interrogantes sobre la posibilidad real de acceso de la población en situación de desplazamiento, a la puerta de entrada más próxima en el ámbito municipal a la institucionalidad encargada de la defensa, promoción y realización de los derechos humanos. Precisamente estos 47 municipios, son a su vez los principales re-

ceptores de población en situación de desplazamiento. ¿Cómo y con cuál institucionalidad se va a suplir, e incluso cualificar, las funciones que las personerías desempeñan en la defensa de los derechos humanos a través del control y seguimiento a las políticas públicas?

Con total certeza queda fuera del tintero temas centrales en el debate sobre el desplazamiento forzado en Colombia. Sin embargo, el propósito de estas líneas consiste en señalar la necesidad de establecer propuestas que consulten con las dimensiones de la problemática compleja del conflicto armado interno, del desplazamiento forzado, de las dinámicas de acelerado empobrecimiento, del deterioro de las condiciones de subsistencia digna para cerca del 60% de la población colombiana, todo ello en un marco de democracia segura que priorice y fortalezca las garantías democráticas, que posibilite plenas libertades y la realización integral de los derechos.

NO PARA EL EXTERMINIO DE SINDICALISTAS COLOMBIANOS

La Escuela Nacional Sindical presenta su análisis, partir de la información registrada en su banco de datos de derechos humanos, sobre la grave situación de violación a los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados colombianos, ocurrida entre el 7 de agosto y el 7 de noviembre de este año.

Una mirada panorámica a las violaciones del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores colombianos, muestra que durante este periodo se presenta un aumento en la violencia contra dirigentes sindicales, una ampliación de las violaciones a otras zonas del país y la persistencia de prácticas y lógicas de actores armados y de sectores sociales que siguen catalogando al sindicalismo colombiano como enemigo del bien común, como aliado de uno u otro

actor armado o como un obstáculo para la ejecución de políticas y estrategias de dominio territorial o económico o como el impedimento para la implementación de nuevas formas de acción política.

En términos generales se puede decir que las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en estos tres meses del año, se inscriben y responden a las tendencias registradas en la última década y las pocas variaciones que existen no alteran, en lo sustancial, el grave panorama de los últimos años pues, entre el 7 de agosto y el 7 de

noviembre de 2002, en Colombia fueron asesinados 19 sindicalistas, 80 fueron víctimas de amenazas de muerte, 6 fueron secuestrados, 3 sufrieron atentados contra su vida y uno fue desaparecido. De este panorama queremos resaltar lo siguiente:

- El 76%, es decir, 98 casos se cometieron contra dirigentes sindicales, miembros de juntas directivas y delegados sindicales. Este hecho permite constatar nuevamente que la violencia en el país contra los sindicalistas es *discriminada y selectiva y que se encuentra dirigida fundamentalmente* contra dirigentes y organizaciones sindicales que poseen gran capacidad de negociación y presión pública y política con el Estado e importantes sectores empresariales del país.
- Esta violencia selectiva y discriminada se manifiesta también en la dramática persecución que sufren los trabajadores y las organizaciones afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Contra esta central que agrupa a 550.000 sindicalistas en Colombia, se cometieron el 74% del total de violaciones a la vida y a la integridad; el 84% de los homicidios (16 casos) y el 73% (59 casos) de las amenazas de muerte. Es importante señalar aquí que para el periodo agosto- noviembre de 2002, se registra un aumento significativo en las amenazas de muerte y los homicidios contra sindicalistas filiales de la Confederación General de Trabajadores Democráticos de Colombia -CGTD-.
- Entre agosto y noviembre, el departamento del Cauca fue la zona

del país en donde ocurrieron el mayor número de violaciones a la vida y a la integridad de trabajadores sindicalizados. Sin embargo y manteniendo la tendencia de la última década el departamento de Antioquia reportó el mayor número de homicidios con un 25% del total nacional.

- En cuanto a la autoría de las violaciones, es necesario señalar que los grupos de autodefensas o paramilitares siguen siendo los principales responsables de los homicidios de trabajadores sindicalizados en el país y además, son responsables del 53% del total de violaciones contra la vida y la integridad en los casos en los cuales se conoce y se suministra la información acerca del autor del hecho. De otro lado, a las organizaciones guerrilleras se les atribuye la responsabilidad en 6 casos de secuestros de trabajadores y en dos homicidios cometidos contra sindicalistas afiliados a SINTRAEMDES.
- Contra la tesis que señala que la violación a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos es una consecuencia del conflicto armado que vive el país y que invisibilice que la mayoría de las violaciones de los trabajadores colombianos son la consecuencia y la causa directa del ejercicio de su actividad, tenemos que señalar que en lo que se

Tabla 11: Total de Violaciones a la Vida, la Libertad y la Integridad contra Trabajadores Sindicalizados, Agosto 7 - Noviembre 7 de 2002.

Tipo de violación	Agosto-noviembre de 2002
Amenazas de muerte	80
Homicidios	19
Atentado con o sin lesiones	3
Detención arbitraria	4
Secuestro	6
Otros	1
Total	113

Fuente: Escuela Nacional Sindical, área de derechos humanos y laborales

Tabla 12: Causas de las Violaciones a los Sindicalistas
Colombianos, Agosto 7 - Noviembre 7 de 2002.

Causa	No. casos	%
Conflicto armado	27	24
Actividad sindical	86	76
Total	113	100

Fuente: Escuela Nacional Sindical, área de derechos humanos y laborales

refiere al periodo agosto-noviembre de 2002, el 76% (86 casos) tuvieron como causa la actividad sindical.

Más allá de estas cifras, que en sí mismas son ilustrativas y alarmantes, lo que se evidencia es que en el país no existen garantías para el ejercicio de las libertades civiles y políticas, que no existen avances en materia de los derechos humanos de los trabajadores, que persiste la violencia discriminada y selectiva y, que las clásicas fórmulas de centralización del poder, estabilidad del orden y seguridad que son las características del nuevo régimen político no son un muro de contención a las prácticas violatorias de los derechos humanos en el país.

Los 98 casos en donde se encuentran homicidios, amenazas, desplazamientos y atentados de dirigentes sindicales ponen en evidencia que lo político y la política no pueden ser reducidas, como se pretende, a un asunto de policía y que precisamente, el ejercicio de los derechos de libertad sindical y de sindicalización junto con el ejercicio de los derechos civiles y políticos son límites que cualquier Estado democrático deben respetar.

Las nuevas lógicas políticas, económicas y laborales hacen incierto e imposible ese gran logro de la modernidad que fue definir un estado con poderes limitados y establecer claramente los derechos humanos como ese muro de contención a los intentos de imponer leviatanes o estados de excepción permanentes.

Este contexto nada alentador para el movimiento sindical colombiano se evidencia en cuatro casos que queremos resaltar:

- El allanamiento “legal” que la Tercera Brigada del Ejército realizó a la residencia del Director del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el 16 de agosto del presente año.
- La amenaza de muerte, el 9 de septiembre de 2002 contra Domingo Tovar Arrieta, Director del departamento de organización de la CUT.
- La amenaza contra las Juntas Directivas de cuatros sub directivas de la Central Unitaria de Trabajadores ubicadas en los departamentos de Cauca, Caldas, Valle y Bolívar.
- Los asesinatos entre otros de Cesar Gómez, Presidente de SINTRA-UNICOL, Sub directiva Pamplona Norte de Santander, asesinado el 5 de septiembre de 2002; Adolfo de Jesús Múnera López, Dirigente sindical de SINALTRAINAL, asesinado el 31 de agosto de 2002; Blanca Ludibia Hernández, dirigente sindical de SINDESS, Sub directiva Córdoba, secuestrada el 7 de agosto y encontrada asesinada el 15 del mismo mes; Carlos Peralta, Fiscal de SINDESENA asesinado el primero de noviembre y el asesinato de Miguel Lora Gómez dirigente sindical de la CTC.

Bogotá D.C., noviembre 18 de 2002

CIFRAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA Julio - Septiembre de 2002

Nota Importante para la Lectura de las Cifras

Durante el trimestre en estudio, el Banco de Datos registró un total de 1.035 casos (205 por violaciones a los derechos humanos, 384 infracciones al derecho internacional humanitario, 388 hechos de violencia político-social y 335 acciones bélicas), los que arrojaron un total de 2.894 víctimas (774 por violaciones a los derechos humanos, 961 por infracciones al derecho internacional humanitario, 890 por violencia político-social y 800 en acciones bélicas). Dichas cifras han sido desagregadas en cada una de sus modalidades, en las tablas presentadas a continuación.

No obstante, importa precisar, que tanto el número total de casos, así como el de víctimas, resulta superado por la sumatoria de cada una de las modalidades en que se desagregan, lo cual se explica en la circunstancia de que en cada hecho se pueden presentar registros de dos o más modalidades de la violencia, al igual que sucede con las víctimas, pues una misma persona puede ser victimizada por violación a los derechos humanos y por infracción al derecho internacional humanitario de manera simultánea.

Tabla 1

Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, según distribución geográfica. Julio 1 a Septiembre 30 de 2002

DEPARTAMENTO	AMENAZA	DESAPARICION	DETENCION ARBITRARIA	EJECUCION EXTRAJUDICIAL	HERIDO	TORTURA	VIOLENCIA SEXUAL	Total general
ANTIOQUIA	0	2	17	67	8	0	0	94
ARAUCA	213	0	0	29	0	12	0	254
ATLANTICO	12	0	0	12	3	0	0	27
BOGOTA	6	0	40	0	2	0	0	48
BOLIVAR	8	0	5	8	2	0	0	23
CALDAS	0	0	2	13	0	2	0	17
CAUCA	44	8	34	16	6	4	0	112
CESAR	4	0	9	4	0	0	0	17
CHOCO	0	0	0	4	0	0	0	4
CORDOBA	0	0	0	2	0	0	0	2
CUNDINAMARCA	0	0	3	0	0	0	0	3
HUILA	0	0	12	0	0	0	0	12
LA GUAJIRA	0	12	0	29	2	23	0	66
MAGDALENA	7	0	0	0	0	5	0	12
META	4	2	1	3	0	4	0	14
NARIÑO	3	0	0	7	0	0	0	10
NORTE DE SANTANDER	0	0	0	1	2	0	0	3
PUTUMAYO	0	0	0	5	0	0	0	5
RISARALDA	15	0	0	0	0	0	0	15
SANTANDER	11	0	0	7	1	0	0	19
SUCRE	0	0	3	11	0	0	4	18
TOLIMA	0	1	30	1	0	0	0	32
VALLE	3	4	0	11	2	0	0	20
Total general	330	29	156	230	28	50	4	827

Tabla 2

Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, según Presuntos Responsables. Julio 1 a Septiembre 30 de 2002

PRESUNTOS RESPONSABLES	AMENAZA	DESAPARICION	DETENCION ARBITRARIA	EJECUCION EXTRAJUDICIAL	HERIDO	TORTURA	VIOLENCIA SEXUAL	Total general
ACCU	0	0	0	4	0	0	0	4
ARMADA	0	0	3	0	0	0	0	3
AUC	271	11	1	96	14	25	4	422
ACMM	0	0	0	1	0	0	0	1
CTI	1	0	0	0	0	0	0	1
DAS	0	0	6	0	0	0	0	6
EJERCITO	32	0	45	22	5	13	0	117
ESTADO COLOMBIANO	1	0	0	0	0	0	0	1
FUERZA PUBLICA	0	1	1	10	0	4	0	16
INPEC	2	0	0	0	0	0	0	2
PARAMILITARES	23	9	31	86	4	6	0	159
POLICIA	0	8	69	11	5	2	0	95
Total general	330	29	156	230	28	50	4	827

Tabla 3

Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, según Sectores Sociales. Julio 1 a Septiembre 30 de 2002

SECTOR SOCIAL	AMENAZA	COLECTIVO AMENAZADO	DESAPARICION	DETENCION ARBITRARIA	EJECUCION EXTRAJUDICIAL	HERIDO	TORTURA	VIOLENCIA SEXUAL	Total general
CAMPESINO	1	0	5	29	62	2	23	4	126
COMERCIANTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
EMPLEADO	15	0	1	22	13	0	0	0	51
INDIGENA	8	0	0	2	7	0	5	0	22
OBRERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
OTRO	2	0	2	35	0	2	0	0	41
PROFESIONAL	5	0	1	3	1	2	0	0	12
SIN INFORMACION	272	24	13	30	115	17	8	0	479
TRABAJADOR INDEP.	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Total general	303	24	22	121	201	24	36	4	735

Tabla 4

Violaciones a los Derechos Humanos por Abuso de Autoridad, según Presuntos Responsables. Julio 1 a Septiembre 30 de 2002

PRESUNTOS RESPONSABLES	DETENCION ARBITRARIA	EJECUCION EXTRAJUDICIAL	HERIDO	Total general
ARMADA	21	0	0	21
EJERCITO	0	6	4	10
FUERZA PUBLICA	0	1	0	1
INPEC	0	3	17	20
POLICIA	2	1	1	4
Total general	23	11	22	56

Tabla 5

Infracciones al DIH contra Personas según Distribución Geográfica. Julio 1 a Septiembre 30 de 2002

DEPARTAMENTO	AMENAZA	CIVIL HERIDO EN ACCIONES BELICAS	CIVIL MUERTO EN ACCIONES BELICAS	ESCUDO	HERIDO INTENCIONA EN L. PERSONA PROTEGIDA	HERIDOS POR ATAQUE A BIENES Y MEDIOS	HERIDOS POR METODOS Y MEDIOS	HOMICIDIO INTENCION AL PERSONA PROTEGIDA	MUERTOS POR METODOS Y MEDIOS	TORTURA	VIOLENCIA SEXUAL	Total general
ANTIOQUIA	20	4	14	1	14	0	29	90	1	0	0	173
ARAUCA	213	0	2	0	0	0	46	29	5	12	0	307
ATLANTICO	20	0	0	0	3	0	0	12	0	0	0	35
BOGOTA	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	12
BOLIVAR	10	0	0	0	2	0	0	10	0	0	0	22
CALDAS	1	0	0	0	0	0	0	17	0	2	0	20
CAQUETA	4	3	2	0	0	0	0	15	0	0	0	24
CASANARE	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	5
CAUCA	48	4	2	2	6	0	8	17	1	4	0	92
CESAR	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	8
CHOCO	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
CORDOBA	0	30	24	0	0	0	0	2	0	0	0	56
CUNDINAMARCA	3	5	2	0	1	0	6	7	0	0	0	24
HUILA	26	3	3	1	0	0	1	3	0	0	0	37
LA GUAJIRA	6	0	0	0	2	0	0	29	0	23	0	60
MAGDALENA	7	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	12
META	6	6	0	0	0	0	0	3	0	4	0	19
NARIÑO	4	0	5	0	0	1	0	14	0	0	0	24
NORTE DE SANTANDER	2	0	0	0	2	0	4	27	2	0	0	37
PUTUMAYO	0	12	0	0	0	0	0	5	0	0	0	17
QUINDIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
RISARALDA	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
SANTANDER	14	0	0	0	1	0	3	7	0	0	0	25
SUCRE	3	0	0	0	1	0	0	20	0	0	4	28
TOLIMA	16	6	4	0	0	0	0	4	0	0	0	30
VALLE	11	0	0	0	2	0	0	15	0	0	0	28
Total general	443	75	58	4	38	1	98	338	9	50	4	1118

Tabla 6

Infracciones al DIH contra Personas según Presuntos Responsables. Julio 1 a Septiembre 30 de 2002

PRESUNTOS RESPONSABLES	AMENAZA	CIVIL HERIDO EN ACCIONES BELICAS	CIVIL MUERTO EN ACCIONES BELICAS	ESCUDO	HERIDO INTENCIONA EN L. PERSONA PROTEGIDA	HERIDOS POR ATAQUE A BIENES Y MEDIOS	HERIDOS POR METODOS Y MEDIOS	HOMICIDIO INTENCION AL PERSONA PROTEGIDA	MUERTOS POR METODOS Y MEDIOS	TORTURA	VIOLENCIA SEXUAL	Total general
ACCU	0	15	12	0	0	0	0	4	0	0	0	31
AUC	271	0	0	0	14	0	0	96	0	25	4	410
AUTODEFENSAS CAMPES	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
CTI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
EJERCITO	32	5	5	2	5	0	1	22	0	13	0	85
ELN	0	0	1	0	3	0	0	13	0	0	0	17
ERP	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3
ESTADO COLOMBIANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FARC-EP	107	39	21	1	6	1	71	87	8	0	0	341
FUERZA AEREA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FUERZA PUBLICA	0	0	1	0	0	0	0	10	0	4	0	15
GUERRILLA	4	3	6	0	0	0	26	6	1	0	0	46
INPEC	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
MOVIMIENTO JAIME BATE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PARAMILITARES	23	2	4	1	4	0	0	86	0	6	0	126
POLICIA	0	11	7	0	5	0	0	11	0	2	0	36
Total general	443	75	58	4	38	1	98	338	9	50	4	1118

Tabla 7

Infracciones al DIH contra Personas según Sectores Sociales. Julio 1 a Septiembre 30 de 2002

SECTORES SOCIALES	AMENAZA	CIVIL HERIDO EN ACCIONES BELICAS	CIVIL MUERTO EN ACCIONES BELICAS	COLECTIVO AMENAZADO	COLECTIVO DESPLAZADO	ESCUDO	HERIDO INTENCIONAL PERSONA PROTEGIDA	HERIDOS EN ATAQUE A BIENES	HERIDOS POR METODOS Y MEDIOS	HOMICIDIO INTENCIONAL POR PERSONA PROTEGIDA	MUERTOS POR METODOS Y MEDIOS	TORTURA	VIOLENCIA SEXUAL	Total general
CAMPESINO	1	15	13	0	0	0	4	0	7	82	0	23	4	149
COMERCIANTE	0	0	1	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	13
EMPLEADO	54	1	0	0	0	0	1	0	6	25	1	0	0	88
HACENDADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
INDIGENA	14	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	5	0	28
OBRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
OTRO	11	0	3	0	0	0	2	0	0	14	0	0	0	30
PROFESIONAL	8	0	0	0	0	0	0	0	4	5	1	0	0	20
SIN INFORMACION	332	86	81	24	48	4	23	1	99	164	7	8	0	877
TRABAJADOR INDEP.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
Total general	420	102	98	24	48	5	34	1	116	314	9	36	4	1211

Tabla 8

Violencia Político Social por Persecución Política, según Distribución Geográfica. Julio 1 a Septiembre 30 de 2002

DEPARTAMENTO	AMENAZA	ASESINATO	ATENTADO	DESAPARICION	HERIDO	SECUESTRO	TORTURA	Total general
ANTIOQUIA	0	70	0	3	30	59	1	163
ARAUCA	0	3	0	0	7	2	0	12
ATLANTICO	1	13	0	0	4	0	4	22
BOGOTA	4	2	1	1	1	0	0	9
BOLIVAR	0	27	0	5	7	12	15	66
BOYACA	0	2	0	0	3	0	0	5
CALDAS	0	3	0	6	3	19	0	31
CAQUETA	5	22	0	0	0	0	0	27
CASANARE	0	3	0	0	0	0	0	3
CAUCA	0	8	0	5	4	1	2	20
CESAR	0	18	0	14	3	4	0	39
CHOCO	0	0	0	0	0	28	0	28
CORDOBA	4	10	0	0	1	0	1	16
CUNDINAMARCA	0	6	0	1	5	2	4	18
GUAJIRIA	0	0	0	0	0	3	0	3
HUILA	0	14	0	0	8	1	0	23
LA GUAJIRA	0	4	0	0	0	11	0	15
MAGDALENA	0	16	0	0	0	20	0	36
META	0	13	0	0	31	15	0	59
NARIÑO	0	1	0	0	0	9	0	10
NORTE DE SANTANDER	0	75	0	1	11	1	5	93
PUTUMAYO	0	0	0	0	3	4	0	7
QUINDIO	0	1	0	0	0	0	0	1
RISARALDA	0	10	0	0	18	4	0	32
SANTANDER	0	12	0	3	1	9	3	28
SUCRE	0	3	0	3	0	14	0	20
TOLIMA	0	12	0	1	2	1	0	16
VALLE	0	22	0	3	22	6	0	53
Total general	14	370	1	46	164	225	35	855

Tabla 9

Violencia Político Social por Persecución Política, según Presuntos Responsables. Julio 1 a Septiembre 30 de 2002

PRESUNTOS RESPONSABLES	AMENAZA	ASESINATO	ATENTADO	DESAPARICION	HERIDO	SECUESTRO	TORTURA	Total general
ELN	0	0	0	0	0	73	0	73
ERG	0	0	0	0	0	1	0	1
ERP	0	0	0	0	0	3	0	3
FARC-EP	0	0	0	0	0	119	0	119
GUERRILLA	0	0	0	0	0	29	0	29
SIN INFORMACION	14	370	1	46	164	0	35	630
Total general	14	370	1	46	164	225	35	855

Tabla 10

Violencia Político Social por Persecución Política, según Sectores Sociales. Julio 1 a Septiembre 30 de 2002

SECTORES SOCIALES	AMENAZA	ASESINATO	ATENTADO	DESAPARICION	HERIDO	SECUESTRO	TORTURA	Total general
CAMPESINO	0	65	0	1	2	1	18	87
COMERCIANTE	0	4	0	2	0	27	0	33
DESEMPLEADO (A)	0	4	0	0	0	0	0	4
EMPLEADO	1	29	1	6	12	33	0	82
EMPRESARIO	0	2	0	0	0	1	0	3
HACENDADO	0	1	0	3	0	6	0	10
INDIGENA	0	5	0	0	0	0	0	5
OBRERO	0	11	0	0	4	1	1	17
OTRO	0	14	0	3	2	4	0	23
PROFESIONAL	3	11	0	0	1	12	0	27
SIN INFORMACION	10	226	0	30	143	139	16	564
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	0	2	0	1	0	0	0	3
Total general	14	374	1	46	164	224	35	858

Tabla 11 Total de Acciones Bélicas,
Julio 1 a Septiembre 30 de 2002

CATEGORIA	Total
ATAQUE A OBJETIVOS MILITARES	37
BLOQUEO DE VIAS	63
BOMBARDEOS / AMETRALLAMIENTO	2
COMBATE	235
EMBOSCADA	6
INCURSION	12
MINAS	5
SABOTAJE	17
Total general	377

Tabla 12 Total Víctimas en Acciones Bélicas,
Julio 1 a Septiembre 30 de 2002

CATEGORIA	Total
ATAQUE A OBJETIVOS MILITARES	106
BLOQUEO DE VIAS	34
COMBATE	727
EMBOSCADA	22
INCURSION	12
MINAS	13
SABOTAJE	3
Total general	917

Tabla 13 Total de Acciones Bélicas según distribución Geográfica, Julio 1 a Septiembre 30 de 2002.

DEPARTAMENTO	ATAQUE A OBJETIVOS MILITARES	A BLOQUEO DE VIAS	DE COMBATE	EMBOSCADA	INCURSION	MINAS	SABOTAJE	Total general
ANTIOQUIA	4	4	120	2	0	3	0	133
ARAUCA	0	0	8	0	0	3	0	11
BOLIVAR	43	0	47	0	0	4	0	94
BOYACA	0	0	42	0	0	0	0	42
CALDAS	0	0	6	0	0	0	0	6
CAQUETA	9	2	87	7	0	0	0	105
CASANARE	5	0	13	4	0	0	0	22
CAUCA	7	4	44	1	3	0	0	59
CESAR	0	0	11	0	0	0	0	11
CORDOBA	0	0	16	0	0	0	0	16
CUNDINAMARCA	5	13	28	0	0	0	0	46
CHOCO	3	0	14	0	0	0	0	17
GUAVIARE	0	0	7	0	0	0	0	7
HUILA	10	0	15	4	2	0	3	34
LA GUAJIRA	0	0	9	0	0	0	0	9
MAGDALENA	0	3	9	0	0	0	0	12
META	0	0	68	0	0	0	0	68
NARIÑO	5	0	5	4	4	0	0	18
NORTE DE SANTANDER	0	0	47	0	0	3	0	50
PUTUMAYO	8	0	8	0	1	0	0	17
QUINDIO	0	0	3	0	0	0	0	3
RISARALDA	0	1	11	0	0	0	0	12
SANTANDER	0	0	25	0	0	0	0	25
SUCRE	3	0	5	0	0	0	0	8
TOLIMA	4	7	42	0	2	0	0	55
VALLE	0	0	37	0	0	0	0	37
Total general	106	34	727	22	12	13	3	917

